

D E C R E T O

QUE DEBE SERVIR DE LEY CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
HASTA EL AÑO DE 1830

Considerando: Que desde principios del año de 1826 se manifestó un deseo vivo de ver reformadas las instituciones políticas, el cual se hizo general y se mostró con igual eficacia en toda la república, hasta haber inducido al Congreso de 1827 a convocar la Gran Convención para el día 2 de marzo del presente año, anticipando el período indicado en el artículo 191 de la Constitución del año 11º;

Considerando: Que convocada la Convención con el objeto de realizar las reformas deseadas, fue éste un motivo de esperar que se restablecería la tranquilidad nacional;

Considerando: Que la Convención reunida en Ocaña el día 9 de abril de este año declaró solemnemente y por unanimidad de sufragios la urgente necesidad de reformar la Constitución;

Considerando: Que esta declaración solemne de la Representación Nacional, convocada y reunida para resolver previamente sobre la necesidad y urgencia de las reformas, justificó plenamente el clamor general que las había pedido, y por consiguiente puso el sello al descrédito de la misma Constitución;

Considerando: Que la Convención no pudo ejecutar las reformas que ella misma había declarado necesarias y urgentes, y antes bien se disolvió por no haber podido convenir sus miembros en los puntos más graves y cardinales;

Considerando: Que el pueblo en esta situación, usando de los derechos esenciales que siempre se reserva para libertarse de los estragos de la anarquía y proveer del modo posible a su conservación y futura prosperidad, me ha encargado de la Suprema Magistratura para que consolide la unión del Estado, restablezca la paz interior y haga las reformas que se consideren necesarias;

Considerando: Que no me es posible abandonar la patria a los riesgos inminentes que corre, y que como ma-

gistrado, como ciudadano y como soldado es mi obligación servirla;

Considerando, en fin: Que el voto nacional se ha pronunciado unánime en todas las provincias, cuyas actas han llegado ya a esta capital, y que ellas componen la gran mayoría de la nación.

Después de una detenida y madura deliberación he resuelto encargarme, como desde hoy me encargo, del Poder Supremo de la República, que ejerceré con las denominaciones de Libertador Presidente que me han dado las leyes y los sufragios públicos; y expedir el siguiente

DECRETO ORGANICO

TITULO I

Art. 1º Al Jefe Supremo del Estado corresponde:

1º Establecer y conservar el orden y tranquilidad interior y asegurar el Estado contra todo ataque exterior;

2º Mandar las fuerzas de mar y tierra;

3º Dirigir las negociaciones diplomáticas, declarar la guerra, celebrar tratados de paz y amistad, alianza y neutralidad, comercio y cualesquiera otros con los gobiernos extranjeros;

4º Nombrar para todos los empleos de la república y remover o relevar a los empleados cuando lo estime conveniente;

5º Expedir los decretos y reglamentos necesarios de cualquier naturaleza que sean, y alterar, reformar o derogar las leyes establecidas;

6º Velar sobre que todos los decretos y reglamentos, así como las leyes que hayan de continuar en vigor, sean exactamente ejecutados en todos los puntos de la república;

7º Cuidar de la recaudación, inversión y exacta cuenta de las rentas nacionales;

8º Hacer que la justicia se administre pronta e imparcialmente por los tribunales y juzgados, y que sus sentencias se cumplan y ejecuten;

9º Aprobar o reformar las sentencias de los consejos de guerra y tribunales militares en las causas criminales se-

guidas contra oficiales de los ejércitos y de la marina nacional;

10. Conmutar las penas capitales con dictamen del Consejo de Estado, que se establece por este decreto, y a propuesta de los tribunales que las hayan decretado, u oyéndolos previamente;

11. Conceder amnistías o indultos generales o particulares y disminuir las penas cuando lo exijan graves motivos de conveniencia pública, oído siempre el Consejo de Estado;

12. Conceder patentes de corso y represalias;

13. Ejercer el poder natural como Jefe de la Administración general de la República en todos sus ramos y como encargado del Poder Supremo del Estado;

14. Presidir, en fin, cuando lo tenga a bien, el Consejo de Estado.

Art. 2º En el ejercicio del Poder Ejecutivo será auxiliado con las luces y el dictamen de un Consejo de Ministros.

TITULO II

DEL MINISTERIO DE ESTADO Y CONSEJO DE MINISTROS

Art. 3º El Consejo de Ministros se compone de un presidente y de los ministros secretarios de Estado.

Art. 4º El Ministerio de Estado se distribuye en los seis departamentos siguientes:

Del Interior o Gobierno;

De Justicia;

De Guerra;

De Marina;

De Hacienda;

De Relaciones Exteriores.

Un decreto organizará el Ministerio y sus departamentos, y hará la distribución de sus despachos.

El Libertador Presidente puede encargar a un Ministro el servicio de dos o más secretarías.

Art. 5º Cada Ministro es el jefe de su respectivo departamento, y órgano preciso para comunicar las órdenes que emanen del Poder Supremo. Ninguna orden expedida por otro conducto ni decreto alguno que no esté autori-

zado por el respectivo Ministro debe ser ejecutado por ningún funcionario, tribunal ni persona privada.

Art. 6º Los ministros secretarios de Estado son responsables en todos los casos que falten al exacto cumplimiento de sus deberes, en los cuales serán juzgados en conformidad de un decreto especial que se dará sobre la materia.

Art. 7º En los casos de enfermedad, ausencia o muerte del Presidente del Estado se encargará del Gobierno de la República el Presidente del Consejo de Ministros, y su primer acto en el último caso será el de convocar la Representación Nacional para dentro de un término que no exceda de ciento y cincuenta días.

TITULO III

DEL CONSEJO DE ESTADO

Art. 8º El Consejo de Estado se compone del Presidente, del Consejo de Ministros, de los ministros secretarios de Estado, y al menos de un consejero por cada uno de los actuales departamentos de la república.

Art. 9º Cuando el Libertador no presida el Consejo de Estado, lo hará el Presidente del Consejo de Ministros.

Art. 10. Corresponde al Consejo de Estado:

1º Preparar todos los decretos y reglamentos que haya de expedir el Jefe del Estado, ya sea tomando la iniciativa o a propuesta de los ministros respectivos, o en virtud de órdenes que se le comuniquen al efecto. Un reglamento especial que se dará el Consejo, previa la aprobación del Gobierno, fijará las reglas de proceder y su propia policía;

2º Dar su dictamen al Gobierno en los casos de declaración de guerra, preliminares de paz, ratificación de tratados con otras naciones; en los de los números 9º, 10 y 11 del artículo 1º de este decreto, y en todos los demás arduos en que se le pida;

3º Informar sobre las personas de aptitud y mérito para las prefecturas y gobierno de las provincias, para jueces de la Alta Corte, cortes de apelación y de los demás tribunales y juzgados; para los Arzobispados, Obispados, dignidades, canonjías, raciones y medias raciones de las

iglesias metropolitanas y catedrales, y para jefes de las oficinas superiores y principales de hacienda.

TITULO IV

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA

Art. 11. El territorio de la república para su mejor administración se dividirá en prefecturas, que serán demarcadas con dictamen del Consejo de Estado luégo que se reúna.

Art. 12. El jefe de cada Prefectura será un Prefecto.

Art. 13. Los prefectos son los jefes superiores políticos en sus respectivos distritos y en ellos los agentes naturales e inmediatos del Jefe del Estado; sus funciones y deberes son los que atribuyen las leyes a los intendentes.

Art. 14. Quedan suprimidas las intendencias de los departamentos: cada Provincia será administrada por un Gobernador, cuyas funciones y deberes son los que se detallan en las leyes y cuya clasificación se hará por un decreto especial.

TITULO V

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Art. 15. La justicia será administrada en nombre de la república y por autoridad de la ley, por una Alta Corte, cortes de apelación y juzgados de primera instancia, tribunales de comercio, cortes de almirantazgo y tribunales militares.

Art. 16. Será una de las primeras atenciones del Consejo de Estado consultar los decretos orgánicos de los tribunales y juzgados, así como lo conveniente sobre el establecimiento de jueces de hecho, tribunales de policía correccional, y organización del ministerio público.

TITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 17. Todos los colombianos son iguales ante la ley e igualmente admisibles para servir todos los empleos civiles, eclesiásticos y militares.

Art. 18. La libertad individual será igualmente garantizada y ninguno será preso por delitos comunes sino en los casos determinados por las leyes, previa información sumaria del hecho y orden escrita de la autoridad competente. Mas no se exigirán estos requisitos para los arrestos que ordene la policía como pena correccional, ni para los que la seguridad pública haga necesarios en casos de delitos de Estado.

Art. 19. La infamia que irroque alguna pena nunca se extenderá a otro que al delincuente.

Art. 20. Todos tienen igual derecho para publicar y hacer imprimir sus opiniones sin previa censura, conformándose a las disposiciones que reprimen los abusos de esta libertad.

Art. 21. Todas las propiedades son igualmente inviolables, y cuando el interés público por una necesidad manifiesta y urgente hiciere forzoso el uso de alguna, siempre será con calidad de justa indemnización.

Art. 22. Es libre a los colombianos todo género de industria, excepto en los casos en que la ley restrinja esta libertad en beneficio público.

Art. 23. Los colombianos tienen expedito el derecho de petición, conformándose a los reglamentos que se expidan sobre la materia.

Art. 24. Son deberes de los colombianos: vivir sometidos al Gobierno y cumplir con las leyes, decretos, reglamentos e instrucciones del Poder Supremo, y velar en que se cumplan; respetar y obedecer a las autoridades, contribuir para los gastos públicos en proporción a su fortuna, servir a la patria y estar prontos en todo tiempo a defenderla, haciéndole hasta el sacrificio de su reposo, de sus bienes y de su vida, si fuere necesario.

Art. 25. El Gobierno sostendrá y protegerá la Religión Católica, Apostólica, Romana como la religión de los colombianos.

Art. 26. El presente decreto será promulgado y obedecido por todos como Ley Constitucional del Estado hasta que, reunida la Representación Nacional, que se convoca para el 2 de enero de 1830, dé ésta la Constitución de la República.

Dado en el Palacio de Gobierno de Bogotá, a 27 de agosto de 1828-18º de la Independencia, y refrendado por los ministros secretarios de Estado.

SIMÓN BOLÍVAR

Por el Libertador Presidente de Colombia, el Secretario del Interior, *José M. Restrepo*.—El Secretario de Guerra, *Rafael Urdaneta*.—El Secretario de Relaciones Exteriores, *Estanislao Vergara*.—El Secretario interino de Hacienda, *Nicolás M. Tanco*.

Al lado del lunar que más se destacaba en este decreto —la supresión de la vicepresidencia— y que tan mal efecto produjo entre los antibolivianos, contiene algunas disposiciones constitucionales bastante importantes, como la creación del Consejo de Estado, para templar el rigor del régimen dictatorial que se implantaba; la mejor organización de los ministerios y responsabilidad de los secretarios del despacho; la administración departamental; la de justicia, con la creación de nuevas entidades encargadas de impartirla, y la protección otorgada a la Religión Católica, aunque dándole cierto carácter oficial: todo lo cual tendía a llenar los vacíos que en estos puntos había dejado la Constitución de Cúcuta.

Bien que aquel decreto fijaba en su último artículo un término preciso al ejercicio de la *dictadura constitucional*, señalándolo en la reunión del Congreso de 1830 que se llamó admirable, el implantamiento y organización de un sistema tan anormal y contrario a las públicas aspiraciones, aunque escudado con la crisis aguda por que atravesaba todo el país, produjo necesariamente fatales con-

secuencias, llegando al colmo de la exaltación el partido antiboliviano que enarbolaba de nuevo como bandera la integridad de la Constitución de Cúcuta.

Fracasó felizmente la conjuración tramada por los amigos del General Santander contra el Gobierno dictatorial y contra la persona y la vida de quien lo ejercía. Viéndose denunciados los conspiradores, resolvieron dar un asalto al palacio presidencial en la noche del 25 de septiembre, y aun cuando el Libertador salvó su vida y pudo continuar en el mando, aquel golpe fatal, dado en lo más hondo de su espíritu, le produjo la muerte del ánimo y de su carrera pública, marcando también huella profundísima en la vida política del país.

Bolívar derogó entonces el temido decreto de 27 de agosto por uno de 26 de septiembre en el cual asumió la dictadura ya sin restricciones ni tapujos constitucionales, y organizó un Tribunal especial, compuesto de cuatro jefes civiles y cinco letrados, para juzgar a los conspiradores. Algunos de ellos fueron condenados con sobra de precipitación al último suplicio; otros, como el General Santander, a prisión perpetua, en cambio del fusilamiento, y ya se sabe hasta dónde ahondaron la conjuración misma y la irregularidad de su castigo las divisiones entre partidarios y enemigos del Libertador, que con estos hechos se hicieron irreconciliables. Allí nacieron los partidos políticos.

El Perú, que deseaba formar un solo territorio con el de Bolivia y las provincias del Sur de Colombia, después de declarar abolida la Constitución boliviana y nulo el nombramiento de Presidente vitalicio, y así buscaba pretexto para declarar la guerra a Colombia, tramó un motín militar, en el cual quedó reducido a prisión el Mariscal Sucre con sus ministros, sin que le fuera posible con-

tener el ejército. Bolivia fue luego vendida a los peruanos por un tratado celebrado en Píquiza.

Al saberse esto en Bogotá, el Libertador mismo quiso volar al Perú a contener la revolución; pero el Consejo de ministros lo disuadió de este intento, y en su lugar fue enviado el General O'Leary a negociar la paz. Mas el jefe peruano Lamar, que para continuar la guerra esperaba en Guayaquil la venida del ejército que en Bolivia había dado muestra de la más negra ingratitud, no quiso oír la voz de la justicia, y desechó las propuestas de O'Leary. Sucre fue entonces nombrado Jefe Superior de aquel departamento, y el General Flórez su segundo: los vencedores de Ayacucho debían, pues, volver allí por el honor de su patria, vilmente ultrajada por aquellos a quienes les habían llevado la libertad, y en el *Portete de Tarqui*, nombre que resuena siempre en el oído de los colombianos como timbre de orgullo y como eco dulcísimo de sus generosidades y sus glorias, quedó vencida la pretensión de los peruanos, sin que el jefe victorioso tuviera otro castigo que la hidalguía y el perdón para la perfidia y la ingratitud de los rebeldes.

Una cosa más desagradable sucedía al propio tiempo en el Sur: los Coroneles José María Obando y José Hilario López, como si siguiesen el ejemplo de los traidores peruanos, alzaronse en armas contra el Gobierno encabezando en el Cauca una desastrosa guerra civil. A someterlos fue enviado el General José María Córdoba con tropas disciplinadas. Las autoridades de Popayán intentaron someter a los guerrilleros de Obando, pero el General Mosquera y el Coronel Murgueitio fueron bien pronto derrotados en la acción de *La Ladera*, y la ciudad quedó en manos del enemigo.

El Libertador determinó entonces definitivamente partir para el Sur. Mas antes de abandonar la capital, como

sus amigos pensasen nuevamente en el proyecto de monarquía, deseando darle la mayor suma de poder apetecible para refrenar las sediciones, quiso volver atrás refrescando sus ideas de acatamiento a las prácticas republicanas, y con la mira de rechazar cuanto tendiera a desvirtuarlas, expidió un decreto de convocación para el 2 de enero de 1830 de un Congreso Constituyente, en el cual tanto él como el país entero fincaban las más halagüeñas esperanzas.

La Convención de Ocaña había declarado necesaria y urgente la reforma de la Constitución de 1821; pero como dicho cuerpo se disolvió sin hacer más que esta declaratoria, puede decirse que desde entonces había cesado de hecho la vigencia de la Carta política de Cúcuta, siendo reemplazada por la dictadura de Bolívar, y bien se veía que este estado de cosas no podía prolongarse.

El Libertador, que en la alocución referente a su decreto de 27 de agosto había dicho: "bajo la dictadura, ¿quién puede hablar de libertad? Compadecemos mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo", deseaba vivamente que se reuniera una Convención o Cuerpo Legislativo, y diera una Constitución acorde con los anhelos y las necesidades del país, ya que en Ocaña todo había fracasado.

Dejó el Gobierno en manos del Consejo de ministros para el despacho de los asuntos ordinarios. A su llegada a Pasto tuvo noticia de la victoria alcanzada por el General Sucre en Tarqui contra el ejército peruano, victoria que llenaba de ignominia a los jefes insubordinados Lamar y Gamarra. Por medio de este último dio el Perú una plena satisfacción a Colombia, y las dos repúblicas quedaron por entonces reconciliadas.

Bolívar pasó al Ecuador, ocupó a Guayaquil, y un tanto angustiado al ver la situación de la república tan in-

clinada a la anarquía, expidió una circular en la cual excitaba a los pueblos a que manifestaran por escrito sus opiniones acerca de gobierno, de la persona del Jefe de la administración y de las demás reformas que debía tener en cuenta el Congreso Constituyente de Colombia; firmó también el tratado definitivo de paz con el Perú; escribió al Consejo de ministros expresando la necesidad de buscar un protectorado en alguna potencia europea, y regresó a Bogotá en los últimos días de octubre.

El Consejo de ministros pensó entonces seriamente en un proyecto de monarquía en Colombia: se consultó sobre el particular a los agentes diplomáticos y a los gobiernos extranjeros; pero Bolívar lo improbó como siempre en absoluto, viendo que la generalidad de los colombianos era opuesta a tal proyecto, y anhelaba por la pronta reunión del Congreso Constituyente que acababa de convocarse. Porque a aquella asamblea habrían de concurrir los miembros más eminentes de ambos bandos: los que preparaban para el Libertador una corona y los que deseaban verlo en un banquillo; de sus deliberaciones habría de surgir la luz, y sus disposiciones tendrían que ser el bálsamo reparador de tantas heridas y el final decoroso de tantas disensiones.

Todo hacía augurar un cambio venturoso. El 20 de enero de 1830 el Libertador en persona instaló solemnemente el Congreso, recibiendo a todos los diputados presentes el juramento constitucional. Presididos por el Mariscal de Ayacucho, reuniéronse allí para salvar a la patria adolorida, como otro tiempo lo hicieran para darle vida independiente, los venerables próceres de nuestra magna epopeya, lo más granado y selecto del personal de aquella época, que no ha tenido rival; hombre de la talla de Restrepo, Castillo Rada, Urdaneta, Ortega, Estévez, Camacho, Borrero, Vergara, Posada Gutiérrez, Briceño,

Aranzazu, Gutiérrez Moreno, García del Río, Canabal, Mendoza, Gual, Larrea, Gori y otros no menos distinguidos.

Hombres, como dice el historiador Groot, de todas las provincias, de todos los partidos, de todas las profesiones; hombres escogidos entre lo más notable de ellas por su patriotismo y por sus luces; hombres elegidos libremente, sin intrigas ni influencias del poder.

Reunido bajo tales auspicios, compuesto de aquellas eminencias, y como nunca inspirado en los más nobles ideales, aquel Congreso mereció entonces el nombre de *Congreso admirable*, y con él lo registra la historia en una de sus más brillantes páginas como modelo de cordura y verdadero patriotismo.

Aún rebosaban estas virtudes en el corazón del Libertador, a pesar de tantos desengaños, y juzgando que su separación del Poder era indispensable para la obra de la pacificación, presentó al Congreso renuncia irrevocable de la Presidencia, con estas elocuentes palabras, que jamás debieran olvidarse:

Dentro y fuera de vuestro seno hallaréis ilustres ciudadanos que desempeñen la Presidencia del Estado con glorias y ventajas. Todos mis conciudadanos gozan de la fortuna inestimable de parecer inocentes a los ojos de la sospecha: sólo yo estoy tildado de aspirar a la tiranía.

Libradme, os ruego, del baldón que me espera si continuo ocupando un destino que nunca podrá alejar de sí el vituperio de la ambición. Creedme, un nuevo magistrado es ya indispensable para la república: el pueblo quiere saber si dejaré alguna vez de mandarle. Los Estados americanos me consideran con cierta inquietud, que puede traer algún día a Colombia males semejantes a los de la guerra del Perú. En la Europa misma no faltan quienes teman que yo desacredite con mi conducta la hermosa causa de la libertad...

Mostraos, ciudadanos, dignos de representar un pueblo libre, alejando toda idea que me suponga necesario para la república. Si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, este Estado no debiera existir, y al fin no existiría.

Disponed de la Presidencia que respetuosamente abdicó en vuestras manos. Desde hoy no soy más que un ciudadano armado para defender la patria y obedecer al Gobierno: cesaron mis funciones políticas para siempre. Os hago formal y solemne entrega de la autoridad suprema que los sufragios nacionales me han conferido.

Pertenecéis a todas las provincias; sois sus más selectos ciudadanos; habéis servido en todos los destinos públicos; conocéis los intereses locales y generales; de nada carecéis para regenerar esta república desfalleciente en todos los ramos de su administración.

Permitidme que mi último acto sea recomendaros que protejáis la Religión santa que profesamos, fuente profusa de las bendiciones del Cielo. La Hacienda nacional llama vuestra atención, especialmente en el sistema de percepción. La educación pública, que es el cancro de Colombia, reclama de vosotros sus más sagrados derechos. El Ejército, que infinitos títulos tiene a la gratitud nacional, ha menester una radical organización. La justicia pide códigos capaces de defender los derechos de la inocencia de hombres libres. Todo es necesario hacerlo, y vosotros debéis poner el fundamento de la prosperidad al establecer las basas generales de nuestra organización política.

¡Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás; pero ella nos abre la puerta para reconquistarlos bajo vuestros soberanos auspicios, con todo el esplendor de la gloria y de la libertad.

Contestándole este mensaje, el Congreso dio al Libertador una especie de satisfacción por todos los ataques y las imposturas de que recientemente había sido víctima; así aprobó totalmente su conducta y "cuanto había hecho para conservar la unión colombiana y libertar a los

pueblos de la anarquía". No sin largo debate y marcada resistencia de varios diputados, admitió al fin la irrevocable dimisión que hacía de la Presidencia, instándole sin embargo a que siguiera desempeñándola hasta que pusiera su firma al pie de la Constitución que iba a expedir; mas el Libertador insistió poco después en separarse del mando, y lo dejó encomendado al General Domingo Caicedo, como secretario de Relaciones Exteriores y presidente del Consejo de ministros. Así vino a sancionar este ilustre patriota la Constitución del Congreso admirable.

El mismo día de la instalación del Congreso dirigió el Libertador la última de sus elocuentes proclamas a los pueblos de Colombia como primer mandatario, en que recalca sobre la rectitud de sus intenciones, y termina diciendo:

¡Colombianos! Acercaos en torno del Congreso Constituyente; él es la sabiduría nacional, la esperanza legítima de los pueblos, y el último punto de reunión de los patriotas. Penden de sus decretos soberanos vuestras vidas, la dicha de la república y la gloria de Colombia. Si la fatalidad os arrastra a abandonarlo, no hay más salud para la patria, y vosotros os ahogaréis en el océano de la anarquía, dejando por herencia a vuestros hijos el crimen, la sangre y la muerte.

¡Compatriotas! Escuchad mi última voz al terminar mi carrera política: en nombre de Colombia os pido, os ruego que permanezcáis unidos, para que no seáis los asesinos de la patria y vuestros propios verdugos.

Desatendidas fueron sin embargo estas tiernas expresiones, que cayeron en la aridez de un campo donde la exaltación de las pasiones políticas había llegado al colmo de sus últimos arrebatos.

No acababa de instalarse el Congreso Constituyente, cuando el traidor Córdoba, uno de los caudillos más distinguidos que había tenido la independencia, el mismo

que en 1828 había hecho gala de venganza y de encarnizamiento contra los conspiradores del 25 de septiembre, el enviado de Bolívar para sofocar la revolución del Sur, y su último Ministro de Guerra, en vez de ocupar una curul en el Congreso como miembro que había sido elegido por Antioquia, volvió armas contra su antiguo ídolo, y de acuerdo con algunos ministros extranjeros, se puso a la cabeza de la revolución de Antioquia, encaminada a sostener la Constitución de Cúcuta y a derrocar la dictadura de Bolívar, desconociendo el Gobierno legítimo. En la batalla del Santuario se dio muerte alevosa al héroe de Ayacucho y jefe de aquella loca aventura; pero sus intrigas y maquinaciones alcanzaron a conmover los extremos de la república.

En el Norte el partido antiboliviano cobraba cada día mayores bríos, tomando pie del proyecto de monarquía que había quedado ya rezagado. Imitando a Córdoba, el General Páez, que al principio había aparentado moderación, secundó el movimiento separatista poniéndose a su cabeza, no obstante que Bolívar le había dicho en carta particular cuál era su pensamiento respecto al proyecto de monarquía, que no se debían cambiar las instituciones, que dejaría la Presidencia, y que sus ideas estaban reducidas a dos palabras: *sostener el Congreso a todo trance*. En diversas provincias venezolanas se levantaron actas dirigidas a solicitar del Congreso, en términos más o menos agrios, la separación absoluta de Venezuela, a la cual no se había manifestado opuesto el Libertador, y varios diputados de allí renunciaron el cargo o se excusaron de aceptarlo, esperando que la anhelada división se verificara en breve de hecho o por acto del Cuerpo Constituyente.

Inició éste sus labores con la expedición de un reglamento para el orden en los debates, y luégo de calificar las credenciales de sus miembros y resolver sobre la elec-

ción de los que habían desempeñado puestos importantes en el Poder Ejecutivo y en la alta magistratura, procedió al estudio de las *basas generales* presentadas por la comisión respectiva para ajustar a ellas la Constitución que habría de expedirse.

La primera de ellas, que decía "la República de Colombia es una e indivisible", dio margen a acalorada discusión sobre los sistemas central y federal, queriendo algunos se adoptara este último para acatar las manifestaciones de Venezuela; pero prevaleció la fórmula propuesta, para no establecer la "anarquía regularizada" que tanto repugnaba el Libertador, lo mismo que la de que el Gobierno debería ser popular, representativo y electivo, para llenar un vacío de la Constitución de Cúcuta, al discutirse lo cual volvió a tratarse el punto de la Presidencia vitalicia que la boliviana establecía. Discutiéronse luego las otras *basas* presentadas por la comisión en los siguientes términos:

1^ª La República de Colombia es una e indivisible; 2^ª El Gobierno deberá ser popular, representativo y electivo; 3^ª El Poder Supremo estará siempre dividido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 4^ª El Poder Legislativo residirá en el Congreso compuesto de las Cámaras del Senado y de Representantes, cuyos actos deberán recibir la sanción del Ejecutivo; 5^ª El Poder Legislativo no podrá delegarse en ningún caso a persona o corporación alguna; 6^ª El Poder Ejecutivo residirá en el Presidente de la República, y lo ejercerá necesariamente por el conducto de los ministros secretarios de Estado; 7^ª Un Consejo de Estado auxiliará al Presidente en los negocios graves de la Administración; 8^ª El Poder Judicial lo ejercerán los tribunales y juzgados con absoluta independencia; 9^ª Para la mejor administración de los pueblos, se dividirá el territorio en departamentos, provincias, cantones y parroquias; 10. Se establecerán Asambleas o Cámaras de Distrito, con facultad de deliberar y resolver en todo lo municipal o local y de representar en lo que con-

cierna a los intereses generales de la república; velar sobre la conducta de los funcionarios públicos en su respectivo distrito y exigir su responsabilidad ante los tribunales competentes por infracción de la Constitución o abuso de autoridad; solicitar la renovación de los empleados inep-tos; intervenir y aprobar el repartimiento de las contribuciones; velar sobre la exacta recaudación y legítima inversión de los fondos públicos; reformar los abusos que se cometan en la ejecución de las leyes y reglamentos que se expidieren sobre el reclutamiento para el reemplazo o aumento del ejército, bagajes, alojamientos y otros servicios de esta naturaleza; proteger la educación pública expidiendo las resoluciones y reglamentos necesarios, y en fin, ejercer atribuciones tan extensas cuanto lo permitan los intereses generales de la república, las cuales deberán especificarse en la Constitución; 11. Se prolongarán los períodos de elecciones, para evitar los inconvenientes que resultan, así de la frecuente variación de los altos funcionarios, como de la misma repetición de aquellos actos; 12. Ningún Poder ni magistrado tendrá facultades ilimitadas y que no estén determinadas por la Constitución; 13. Ningún Poder ni magistrado tendrá en ningún caso la de suspender las garantías individuales, fuera de aquellos que se establezcan en la Constitución; 14. Todo funcionario público está sujeto a responsabilidad en el ejercicio de su autoridad, y la del Ministerio de Estado se determinará de modo que en ningún caso concorra o se confunda con la del Jefe del Estado; 15. La Constitución garantiza la Religión Católica, Apostólica, Romana, como la Religión del Estado; la seguridad personal, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta, la de industria y el derecho de petición.

A la basa primera le adicionó el Mariscal Sucre estas palabras, y así quedó aprobada: "Se ratifica la integridad de la República de Colombia conforme a la Ley Fundamental de 1821". De esta suerte quedaba concluido el largo debate a que dio origen la materia de la unión colombiana, por las peticiones que en sentido contrario continuaban llegando de Venezuela, y acerca de las cua-

les resolvió el Congreso no tener en consideración sino las que versasen sobre organización interior del Gobierno de la república unida.

Fue también materia de larga polémica lo relativo a las atribuciones de las Cámaras o Asambleas de Distrito, conviniéndose al fin en suprimirles algunas de las extensas facultades que la basa 10^a les atribuía. En todo se veía la tendencia a proceder con cautela y a relajar un poco el exceso de centralismo imperante, para evitar un rompimiento fatal con los departamentos disidentes; mas las tendencias separatistas habían ido demasiado lejos y era ya de todo punto imposible evitar su realización.

Comprendiendo Bolívar que se había tomado pie de sus propias palabras para fomentar la separación de Venezuela, quiso ir en persona a impedirla; pero el Congreso se manifestó opuesto a tal viaje sin que se acordase la nueva Constitución, y en su lugar designó a tres de sus más conspicuos miembros, el Mariscal Sucre, presidente del Congreso, el vicepresidente don José María Estévez, Obispo de Santamarta, y don Juan García del Río, uno de los Diputados por Cartagena, para que marcharan en misión de paz a Venezuela y "procediendo a todo temor y a toda sospecha, hicieran conocer allí las verdaderas intenciones de la Representación Nacional, y las esperanzas que ofrecían en escrupulosa consideración a la situación presente de la República, y su ardiente anhelo por dejar satisfechos los votos nacionales".

Llevó esta comisión las basas fundamentales acordadas por el Congreso, para que allí se discutieran y modificaran con calma en la forma que los venezolanos propusiesen; mas ya para entonces se había declarado el General Páez Jefe Supremo de Venezuela, disponiéndose a abrir campaña contra la Nueva Granada, y desde tiempo atrás había convocado un Congreso Constituyente que, reu-

niéndose en Valencia, sancionara la separación y diera instituciones propias a la nacionalidad compuesta de todas las comarcas venezolanas. Así la misión de paz quedó desairada, y nada pudo adelantar en la reconciliación que por todos los medios posibles había propuesto.

Y de otro lado el General Flórez promovía un alzamiento en el Ecuador para constituir también independientemente este Departamento de la unión colombiana; de modo que ella tocaba a su término con las convulsiones que agitaban los extremos de su territorio, al propio tiempo que en el centro se iniciaba un partido sostenedor de las ideas divisionales.

Causa de todos estos desastres era la preponderancia del elemento militar que agobiaba el civil y político, produciendo alarmante desazón en los pueblos. "Estos, dice el historiador Restrepo, ya no podían sufrir el militarismo que dominaba por doquiera, y que todo lo había invadido en la República: militares eran los jefes superiores, militares los prefectos, y militares los gobernadores de las provincias, cada una de las cuales tenía también su comandante de armas. Tanto el Libertador como el Ministro de la Guerra habían prodigado los grados y empleos en la milicia, de modo que los militares y el ejército absorbían todas las rentas públicas. Por este motivo era casi imposible establecer en ellas orden y estabilidad. Hé aquí el cáncer que devoraba a Colombia".

Llegó a proyectarse la disolución del Congreso en vista de aquellos conflictos; pero la mayoría convino en continuar sus labores, haciendo de ellos aparente caso omiso, en la esperanza de que la nueva Constitución los conjurase.

Presidida por don Estanislao Vergara, representante de Bogotá y antiguo ministro del Libertador, trabajó asiduamente la comisión elegida para presentar el proyecto de

Constitución de conformidad con las basas previamente acordadas. En aquella selecta comisión estaban representadas las tres secciones del territorio, pues la componían a más de su presidente, los granadinos Manuel María Quijano, Francisco Aranda, José Cucalón, Eusebio María Canabal y José Antonio Amaya; los venezolanos José María Carreño, Juan Gual y José Miguel de Unda, y los ecuatorianos José Modesto Larrea, Martín Santiago de Icaza y José Félix Valdivieso.

Ciñóse en efecto la comisión a las basas acordadas, procurando conservar cuanto fue posible los principios consignados en la Constitución de Cúcuta, muchas de cuyas disposiciones habían arraigado en la opinión de los pueblos, de modo que las innovaciones tendrían que reducirse a lo que enseñase la experiencia en determinados puntos. Acompañaron al proyecto una exposición de motivos sobre cada una de ellas.

Así es que, aunque en el proyecto que os presentamos, dice la comisión, se ha conservado la forma central de gobierno, no es estricta la centralización, sino modificada; de manera que sin privar al Gobierno del vigor y fuerza que debe conservar para mantener el orden interior y atraerse consideración y respeto en lo exterior, se ha atendido a los intereses locales en las diversas partes de la República, por medio de las cámaras o asambleas territoriales, que constituyen una de las diferencias que ya habéis adoptado en las basas con respecto a las antiguas instituciones.

En el Poder Legislativo sólo se introducían variaciones en cuanto a la duración de los senadores y renovación por partes de los representantes, en armonía con principios de política constitucional más aplicables al país.

Con la mira de evitar los riesgos e inconvenientes a que se exponía la república por las frecuentes elecciones

nes, fijó la comisión en ocho años el período presidencial, y para calmar las declamaciones populares contra el ejercicio extraordinario del poder en épocas de conmoción interna o de invasiones exteriores repentinas, se señalaron términos precisos a las facultades extraordinarias, que no podrían ejercerse sino en receso de las Cámaras Legislativas; mas el Congreso las suprimió todas. En otras materias se ampliaron las facultades del Ejecutivo, y quedaron declarados mejor que en la anterior Constitución los casos únicos de responsabilidad del Presidente de la República, circunscribiéndolos sin embargo, para fijar la de los ministros en términos precisos. Sobre ellos dice la exposición de motivos:

A la irresponsabilidad del Presidente por los actos de la administración era consiguiente y necesaria la responsabilidad del Ministerio. Sin esta medida de salud, que es el resorte y nervio del Poder Ejecutivo, la administración sería un caos y quedaría expuesta a inevitables extravíos. Cuando los ministros de Estado sepan que son responsables por el mal desempeño de sus funciones en el departamento que se les confía, se ocuparán constantemente del bien, evitarán cuidadosamente el mal, y desplegarán energía cuando hayan de oponerse a los caprichos del Presidente, seguros de que nada les salvará de la responsabilidad que los liga.

Esta reforma en la administración demandó igualmente el establecimiento de un Consejo de Estado. El antiguo Consejo de Gobierno, compuesto en su mayor parte de miembros del Departamento Ejecutivo, no podía corresponder cumplidamente a los objetos de su institución, y el Presidente de la República tenía que limitarse a sus propios recursos o valerse de las luces de algunos ciudadanos, que aunque animados del más puro patriotismo, no estaban debidamente designados para la importante función de aconsejar al Gobierno: por tan poderosos motivos la Constitución que se os presenta establece un Con-

sejo de Estado, compuesto de los hombres de más luces, probidad y patriotismo.

En cuanto al Poder Judicial no se hizo variación sustancial alguna; sólo que se estableció el ministerio público, como agente del Ejecutivo para defender la observancia de las leyes y los intereses nacionales ante los tribunales de justicia.

Respecto al régimen interior, se crearon las Cámaras de Distrito encargadas de deliberar y resolver en todo lo municipal y local con relativa autonomía.

Sin esta saludable institución, dice el informe preliminar, el Gobierno, reducido a la necesidad de hacerlo todo por sí mismo, tendría que complicar sus funciones o que descuidar involuntariamente los intereses de aquellas partes a que no pudiese extender su acción, por asidua y constante que fuese su vigilancia.

Con ligeras variaciones de detalle, pues en su mayor parte fue textualmente copiado, pasó el proyecto de la Comisión en los tres debates reglamentarios, y quedó definitivamente aprobado en la sesión del 29 de abril de 1830. Considerable era el número de los diputados granadinos que firmaron la Constitución en este día, si se le compara con el de los representantes de las provincias ecuatorianas, que no pasaron de diez, y el de los venezolanos, que por renuncia de sus otros compatriotas, apenas llegó a siete. Pretexto fue esta reducida representación para rechazar el nuevo Estatuto en Venezuela, y considerarlo como letra muerta en el Ecuador.

Hallándose ausente don Joaquín Mosquera, a quien el Congreso había elegido para reemplazar a Bolívar, tocó al General Domingo Caicedo sancionar la Constitución como Vicepresidente, encargado del Poder Ejecutivo, ministerio que desde antes ejercía por designación del mis-

mo Bolívar. Tres meses de labor habían sido suficientes para expedir no sólo la nueva Carta política, sino también otros actos de suma trascendencia que tuvo a su cuidado el Congreso, y varios decretos y leyes sobre diversos ramos del servicio público.

Teóricamente, la obra de reparación estaba consumada. Aquella Constitución sentó las bases del centralismo republicano en el poder político, pero dando mayor ensanche y verdadera existencia al poder municipal, para temprar los excesos del federalismo que había tratado de implantarse, sin menos cabo de alguna prudente amplitud en la organización de las secciones. Reconoció la Religión Católica como la de Colombia, poniendo término a difíciles cuestiones eclesiásticas, para llenar un vacío de la de Cúcuta; detalló los derechos civiles y las garantías de los colombianos, estableciendo también la responsabilidad de los funcionarios públicos; compendió el sistema electoral indirecto, dejando a la ley su desarrollo; introdujo importantes reformas en el ramo Legislativo, y dio al Ejecutivo el carácter de colaborador suyo, regularizando el ejercicio de las facultades presidenciales; determinó los casos de responsabilidad presidencial y ministerial; organizó el Consejo de Estado con un personal selecto y numeroso; instituyó el ministerio público, poco antes desconocido; confirió perentorias facultades a las Cámaras de Distrito, robusteciendo así la acción departamental; organizó convenientemente la fuerza armada y la administración de justicia; estableció juicio por arbitramento; abolió la pena de confiscación, y finalmente, facultó al Congreso para interpretar y reformar la misma Constitución, mediante ciertas formalidades, y sin las trabas que para ello había establecido la de Cúcuta.

Quedaban así hábilmente combinados los opuestos intereses y tendencias de cada parcialidad política: corrigien-

do el exceso centralista de la Constitución de 1821, que tanto afectó el desarrollo seccional, quedó implantado un régimen de amplia descentralización administrativa, armonizando con el de la unidad y centralización política, que hoy se mira como el más adaptable a Colombia, después de ensayar tantos otros sistemas opuestos.

La Constitución de 1830, dice el comentador Samper, era seguramente la más sabia y completa que hasta entonces se hubiese concebido en la América Española: hacía honor a Colombia, era fruto de patrióticas transacciones entre bolivianos y antibolivianos, federalistas y centralistas, autoritarios y liberales, y daba la prueba de un gran progreso alcanzado en la posesión de las doctrinas sobre Derecho Público interno, así como en el arte de constituir con acierto y moderación una república de gobierno popular y representativo.

Basta a corroborarlo el hecho de que medio siglo después, cuando una reforma fundamental se impuso, tras largas y sangrientas luchas, los delegatarios de 1886 la tuvieron como base y acogieron muchos de sus cánones principales al expedir la Constitución de aquel año que aún nos rige. Y cuenta que ella ha quedado en pie, intacta en sus fundamentos esenciales, al través de los ataques que se le han inferido y de dos poderosas revoluciones encaminadas a derrocarla.

Si el Congreso de 1830 fue admirable, también admirable fue su obra. Aquella Constitución es una joya preciosísima legada a la posteridad como el último tributo de una nación agonizante; es uno de los más bellos documentos que engalanan nuestra historia; pero que por lo mismo trae a la mente muy tristes remembranzas del pasado y muy serias reflexiones para el porvenir. Los sacrificios y los esfuerzos de todo género por consolidar la unión fue-

ron estériles: ya habían cobrado tanta fuerza los elementos de disociación, que la nueva Carta política no alcanzó a contrarrestarlos. Colombia entró entonces en la agonia de su corta vida, según gráfica frase, "abrumada bajo el peso de sus glorias y despedazada por sus propios caudillos".